

Intervención de la diputada María Irene Montiel Servín, con el tema: “La Educación: inicio del ciclo escolar 2026-2027”.

La presidenta:

En desahogo del inciso “e” del punto número cinco del Orden del Día, se concede el uso de la palabra a la diputada María Irene Montiel Servín hasta por 10 minutos.

La diputada María Irene Montiel Servín:

Con su venia, presidenta.

Buenas tardes nuevamente, compañeros.

Medios de comunicación y a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas digitales.

Subo esta Tribuna para hablar de educación justo en el momento en que miles de familias guerrerenses

inician o tratan de iniciar el ciclo escolar 2026-2027. Y lo hago con firmeza, porque lo que hoy se presenta como una buena noticia esconde en los hechos una historia de abandono, de improvisación y de irresponsabilidad presupuestal que este gobierno se ha empeñado en normalizar cada año.

Cada inicio de ciclo escolar se convierte para el gobierno en turno en un ritual de fotografías, de boletines y de cifras optimistas, pero detrás de esas puesta en escena hay una realidad que los guerrerenses viven todos los días: Escuela sin presupuesto suficiente para atender la demanda del magisterio por falta de plazas, docentes y salarios.

Infraestructura educativa en gran parte ya caduca, insuficiente, con

escasez de materiales didácticos y limitaciones de transporte para llegar a las comunidades, instituciones enteras abandonadas y familias a las que no les alcanza para comprar la lista de útiles, esto lo sé perfectamente porque también tengo el orgullo de ser maestra por profesión y por convicción.

Pero hoy quiero hablar de tres historias que están ocurriendo al mismo tiempo en este preciso arranque del ciclo escolar y que complementan la realidad del Estado de la educación en Guerrero.

Primero, hace apenas unos días el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero informó con evidente satisfacción que la máxima casa de estudios recibirá alrededor de 27 mil estudiantes de nuevo ingreso para este ciclo escolar. 15 mil en nivel medio superior distribuidos en 50 preparatorias, miles más en licenciatura y carrera técnica y otros tantos en 70 posgrados. Se habló de un ciclo escolar cerrado con mucho éxito y de extraordinarios resultados.

Compañeras y compañeros, ojalá esas cifras fueran por sí solas sinónimo de calidad educativa, pero una universidad no se mide únicamente por cuántos jóvenes logra inscribir, sino por las condiciones en las que los recibe, por la infraestructura de sus planteles, por el estado de sus servicios básicos, por la certeza laboral de sus maestros y por la transparencia con la que administra los recursos públicos que año con año le autoriza este Congreso.

Presumir números de nuevo ingreso sin hablar de esas condiciones no es rendición de cuentas, es propaganda institucional y esta Soberanía no puede conformarse con eso.

Segundo y uno que resulta particularmente doloroso. El pasado 23 de agosto se documentó públicamente que el gobierno del Estado había decidido cerrar a partir de este ciclo las cuatro escuelas de iniciación artística avaladas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y

Literatura, los planteles ubicados en Taxco de Alarcón, Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo y Pungarabato.

Estas escuelas no solo educan, son la herramienta para alejar a nuestra juventud de la tentación de sumarse al crimen organizado. La razón que se dio para el cierre no fue pedagógica ni presupuestal en sentido técnico, fue la proximidad del fin de la administración de la gobernadora, cuyo periodo concluye en octubre del 2027.

Es decir, se pretendía cerrar espacios formativos para cientos de jóvenes, repito, vulnerables frente al crimen organizado, no porque no hubiera forma de sostenerlos, sino porque a este gobierno ya no le interesaba comprometerse con un programa que no le alcanzaría a inaugurar en el corto plazo, esa es la lógica del cortoplacismo político aplicada, sin ningún pudor a la educación artística de nuestros hijos.

Ante la presión social, la propia titular de la Secretaría de Cultura, Aida Melina Martínez Rebolledo, tuvo que dar marcha atrás y anunciar apenas la semana pasada que las escuelas continuarán operando con un nuevo ciclo que arrancará hasta el próximo 5 de octubre.

Pero el propio coordinador del municipio de Taxco del Alarcón fue claro al reconocerlo, a los maestros todavía se les adeudan 4 meses de salario que debieron cubrirse en la primera quincena de agosto y que hasta el día de hoy siguen sin pagarse.

Y agregó algo que debe preocupar a esta Soberanía, ya no ha sido posible siquiera contactar a la coordinadora estatal de estas escuelas por parte de la Secretaría de Cultura.

Compañeras y compañeros, no estamos hablando de un problema resuelto. Estamos hablando de un gobierno que anuncia un cierre, que lo desmiente cuando estalla la indignación pública, pero que sigue

sin pagar a quienes forman todos los días a la juventud guerrerense a través del arte. Eso no es rectificación, es una simulación y las y los maestros de esas escuelas merecen algo mejor que promesas de última hora.

Y por último, otro ejemplo que retrata con mayor crudeza que ningún otro es la ausencia de una verdadera política de estado en materia educativa. El caso de la Universidad Americana de Acapulco, por cierto, me atrevo a pensar que quizá más de uno de quienes integramos esta Soberanía tuvieron oportunidad de formarse en esa institución que durante más de tres décadas formó a miles de guerrerenses en bachillerato, licenciaturas, posgrado y programas incorporados a la UNAM. y que resultó gravemente dañada por el huracán Otis el 25 de octubre del 2023.

En diciembre de ese mismo año se anunció su cierre indefinido, hubo protestas de estudiantes y profesores, bloqueos sobre la

avenida Costera Miguel Alemán y exigencias de titulación y devolución de pagos de la Secretaría de Educación Guerrero, tuvo que atender apenas en enero del 2024, ya que con el conflicto en las calles y luego se convino con la UAGRO brindarles opciones de determinación y titulación.

Estamos por cumplir 3 años de aquel huracán y el inmueble de esa universidad que en algún momento llegó a tener alrededor de 3,500 estudiantes, continúa cerrado y totalmente abandonado, sin certeza de reapertura ni claridad pública sobre qué ocurrió finalmente con su patrimonio. Incluso hay versiones de que previo al huracán Otis el edificio ya se había vendido y los daños provocados por ese meteoro fueron la excusa perfecta para cumplir el propósito de cerrarlo.

El tema no es menor, pues esta institución nació, según su propia historia del impulso de un gobierno estatal comprometido con que los jóvenes guerrerenses no tuvieran que

migrar para estudiar una carrera, terminó desapareciendo en la indiferencia de las autoridades actuales, sin que hasta la fecha exista de parte del Ejecutivo Estatal un solo informe público que explique con claridad qué ocurrió con esas instalaciones y con los recursos públicos y privados invertidos en ellas durante más de 30 años de su funcionamiento.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, 27 mil estudiantes que ingresan a la universidad pública que cubren pagos de inscripción y otros trámites como la validación de documentos, revisión de documentos, contribución escolar, credencial digital, otros servicios, servicios administrativos y servicios digitales, cada uno de los alumnos de nuevo ingreso están pagando en promedio un monto de \$ 1,105 pesos, los cuales los jóvenes que están a punto de ingresar o que ya ingresaron tienen derecho a exigir mayor transparencia en los recursos que se ejercen porque ellos son quien los están pagando.

Cuatro escuelas de arte que estuvieron a punto de desaparecer y cuyos maestros siguen sin cobrar 4 meses de salario, tienen derecho a que se les cubra el adeudo y una universidad con origen ligado a un proyecto de gobierno que lleva casi 3 años en ruinas sin que nadie rinda cuentas tiene la sociedad el derecho a saber la situación y el destino de su patrimonio y del recurso público.

Y no, no pretendo, no pretendo quedarme solo con los señalamientos, vengo con toda responsabilidad a partir de esta intervención a dejar una serie de propuestas concretas.

La primera, que la Universidad Autónoma de Guerrero, al recibir a sus 27 mil nuevos estudiantes, transparente ante la ciudadanía las condiciones reales de infraestructura, de servicios y plantilla docente en las que serán recibidos y no únicamente la cifra que le conviene difundir en un video institucional.

Segundo, que la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Guerrero informen el estado real de los adeudos laborales en las cuatro escuelas de iniciación artística y el calendario puntual para saldarlos antes de que inicie el nuevo ciclo escolar el próximo 5 de octubre.

Tercero, que se transparente el destino del inmueble y el patrimonio de la Universidad Americana de Acapulco.

Y cuarto, que el gobierno del Estado haga público la recepción de los 100 millones anunciados por la presidenta de la República e informe el destino de cada peso y centavo destinado a la educación de nuestro Estado, así como el plazo para su ejecución.

La educación no solo se construye con boletines de prensa ni con cifras aisladas, se construye con maestros pagados a tiempo, con escuelas que tienen instalaciones adecuadas, con maestros suficientes, con material y equipo básico, con luz y agua, con universidades reconstruidas y con

autoridades que rinden cuentas de cada peso que ejercen antes de que termine su gestión o pidan licencia para buscar otros cargos ahora que viene la elección.

Desde el Partido Acción Nacional, desde esta representación que ostento, seguiremos vigilando, exigiendo y cuando sea necesario, levantando la voz desde esta Tribuna por cada omisión que vaya en retroceso o ponga en riesgo el derecho a la educación de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros adolescentes.

Es cuánto, diputada presidenta.